

EJERCICIO TIPO TEST DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DEL PUESTO DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL, CUYAS BASES FUERON APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.º 328/2026 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2026, Y CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE INTERINIDAD, PUBLICADAS EN EL BOP N.º 89 DE 12/05/2026.

1. El artículo 139.1 de la Constitución Española de 1978 establece que:

- A) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
- B) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
- C) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

2. Respecto a la representación de los interesados en un procedimiento, el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su apartado 3:

- A) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, se presumirá la representación.
- B) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación.
- C) Para actos y gestiones de mero trámite deberá acreditarse la representación.

3. En el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se regula la notificación, indicando al respecto que:

- A) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
- B) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

C) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

4. Sobre la declaración de lesividad, el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que:

A) La declaración de lesividad deberá adoptarse antes de que transcurran cinco años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82.

B) Transcurrido el plazo de doce meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo

C) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

5. La iniciación del procedimiento de oficio por la administración podrá ser, según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de la siguiente manera:

A) Por solicitud del interesado o por acuerdo del órgano competente.

B) Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

C) Por acuerdo del órgano competente, bien por petición del interesado o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

6. Según lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la subsanación y mejora de la solicitud:

A) Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

B) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días hábiles, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

C) En los procedimientos iniciados de oficio, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

7. El artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, regula los requisitos y efectos de la caducidad, estableciendo que:

- A) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.
- B) Contra la resolución que declare la caducidad no cabrá recurso administrativo alguno.
- C) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados sí interrumpirán el plazo de prescripción.

8. Según lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:

- A) Apremio sobre el patrimonio personal, ejecución patrimonial, sanción pecuniaria o compulsión sobre las personas.
- B) Apremio sobre el patrimonio, multa coercitiva, sanción económica o compulsión sobre las personas.
- C) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas.

9. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, podrá interponerse por los interesados el recurso de alzada:

- A) En el plazo de dos meses, si el acto fuera expreso.
- B) En el plazo de un mes, si el acto fuera expreso.
- C) En el plazo de tres meses, si el acto fuera expreso.

10. Según el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, están legitimados para interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública:

- A) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo prohíba expresamente.
- B) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.
- C) Los particulares, cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de la Administración pública.

11. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida:

- A) Se considerarán contratos de servicios, conforme a su artículo 16.3.b).
- B) Se considerarán contratos de suministro, conforme a su artículo 16.3.b).
- C) Se considerarán contratos privados, conforme a su artículo 16.3.b).

12. Conforme al artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse después de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
- B) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.
- C) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

13. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, prevé en su artículo 204 que los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia, cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido previsto en su apartado 1:

- A) Hasta un máximo del 20% del valor estimado del contrato.
- B) Hasta un máximo del 20% del precio inicial.
- C) Hasta un máximo del 10% del precio inicial.

14. De conformidad con el artículo 231.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión y aprobación del correspondiente proyecto que definirá técnicamente el objeto del contrato.
- B) La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.
- C) La adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato.

15. Según establece al artículo 257.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los concesionarios de obras tendrán derecho:

- A) Al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270.
- B) A ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el proyecto, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270.
- C) A admitir la utilización de las obras por todo usuario, en las condiciones que hayan sido establecidas.

16. Señale la opción correcta, según se establece en el artículo 284.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) La Administración podrá gestionar directamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares.

B) La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares.

C) La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que no sean susceptibles de explotación económica por particulares.

17. Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido:

A) Salvo pacto en contrario, serán de cuenta del contratista.

B) Salvo pacto en contrario, serán de cuenta de la Administración contratante.

C) En todo caso serán de cuenta de la Administración contratante.

18. Entre las causas de resolución de los contratos de servicios, el artículo 313 de la de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, recoge:

A) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a seis meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.

B) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a cuatro meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.

C) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.

19. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales, conforme establece la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, corresponde:

A) Al Pleno.

B) Al Alcalde o Presidente de la Entidad Local.

C) Al Alcalde o Presidente de la Entidad Local o el Pleno, según el valor estimado del contrato.

20. De conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de:

A) Tres meses.

B) Seis meses.

C) Nueve meses.

21. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma:

- A) Indistinta.
- B) Solidaria.
- C) Subsidiaria.

22.- Indica cuál de las siguientes normas tiene carácter básico al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución:

- A) La Ley 5/2010 de 11 de junio.
- B) El Real Decreto 891/1996, de 7 de junio.
- C) El Real Decreto 365/1995 de 10 de marzo.

23.- En el supuesto de solicitud de empadronamiento de un menor cuando existe una resolución judicial que establece la guarda y custodia compartida por ambos progenitores, si la resolución judicial por la que se fija la guarda y custodia compartida no se pronuncia sobre el lugar de empadronamiento, el Ayuntamiento exigirá antes de tramitar cualquier modificación del domicilio del menor:

- A) Una declaración responsable del progenitor que inste el empadronamiento alegando los perjuicios que pudieran producirse para el menor.
- B) Un auto Judicial indicando con qué progenitor debe convivir el menor.
- C) Una prueba documental de que existe mutuo acuerdo entre los progenitores y, en caso de que no se pueda acreditar el mutuo acuerdo, deberá exigir la presentación de una nueva resolución judicial que se pronuncie expresamente sobre el empadronamiento.

24.- Señala la respuesta correcta:

- A) La organización municipal se regula en la Ley 7/1985 de 2 de abril, con carácter exclusivo.
- B) Las comunidades autónomas pueden dictar leyes de Régimen Local en la que se regule la organización necesaria de las Entidades Locales de Régimen común de su ámbito territorial.
- C) Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y en las leyes de las comunidades autónomas.

25.- Señala la respuesta correcta:

- A) Los municipios solo pueden ejercer competencias propias en las materias contempladas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
- B) El municipio puede ejercer competencias distintas de las propias en las materias del artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio.
- C) El municipio solo puede ejercer competencias distintas de las propias en los términos previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

26. En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 3.001 y 10.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de:

- A) Tres.
- B) Dos
- C) Cuatro

27. La concertación de operaciones de tesorería es competencia del Alcalde-Presidente:

- A) Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 30 por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto.
- B) Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
- C) Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 10 por ciento de los ingresos corrientes y estén previstas en el presupuesto.

28. En los términos del artículo 128.2 de la Constitución Española, las entidades locales andaluzas:

- A) Podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas en el marco de sus políticas propias, en régimen de libre concurrencia.
- B) No podrán ejercer la iniciativa económica cuando la misma actividad se esté prestando por la iniciativa privada en el municipio.
- C) Podrán ejercer la iniciativa económica cuando se adopte el acuerdo por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

29. Señala la respuesta correcta:

- A) La enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo requiere la autorización de la Comunidad Autónoma cuando el valor exceda del veinticinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto de la Entidad Local.
- B) Las entidades locales de Andalucía podrán disponer de sus bienes y derechos de carácter patrimonial sin necesidad de autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe.
- C) Las entidades locales de Andalucía podrán disponer de sus bienes y derechos de carácter patrimonial con autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando su importe exceda del veinticinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

30. Cuando el Pleno extraordinario lo soliciten al menos la cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de:

- A) Dos meses desde la solicitud.
- B) Veinte días hábiles desde la solicitud.
- C) Quince días hábiles desde la solicitud.

31. Señala la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía:

- A) La invalidez de parte de un instrumento de ordenación no implicará la de las partes de este independientes de aquella y las que sean susceptibles de gestión y ejecución autónomas, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella no se hubiera aprobado el instrumento de ordenación o quedara desvirtuado el modelo de ordenación propuesto por el instrumento de ordenación urbanística.
- B) La invalidez de parte de un instrumento de ordenación no implicará la de las partes de este independientes de aquella y las que sean susceptibles de gestión y ejecución autónomas, siempre

que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella no se hubiera aprobado el instrumento de ordenación o quedara desvirtuado el modelo de ordenación propuesto por el instrumento de ordenación urbanística.

C) La invalidez de parte de un instrumento de ordenación implicará en todo caso la invalidez del instrumento de ordenación.

32. Conforme dispone el artículo 64 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, salvo que el instrumento de ordenación territorial disponga lo contrario, el Plan General de Ordenación Municipal y el Plan de Ordenación Urbana podrán ser sustituidos por un Plan Básico de Ordenación Municipal:

A) En todos los municipios que tengan una población inferior a 10.000 habitantes.

B) En los municipios que tengan una población inferior a 10.000 habitantes, siempre que no sean litorales o formen parte de la aglomeración urbana de un centro regional.

C) En los municipios que tengan una población inferior a 15.000 habitantes, siempre que no sean litorales o formen parte de la aglomeración urbana de un centro regional.

33. En el sistema de compensación, conforme dispone el artículo 103.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía:

A) Los acuerdos de la Junta de Compensación podrán ser recurridos, en todo caso, ante el Ayuntamiento, cuya resolución agotará la vía administrativa.

B) Los acuerdos de la Junta de Compensación podrán ser recurridos, potestativamente, ante la Asamblea General, cuya resolución podrá ser recurrida ante el Ayuntamiento con carácter previo a la interposición de recurso en vía contencioso-administrativa.

C) Los acuerdos de la Junta de Compensación podrán ser recurridos, en todo caso, ante la Asamblea General, cuya resolución agotará la vía administrativa.

34. En relación con los ingresos de derecho privado, el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que:

A) Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes en ningún caso.

B) Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

C) Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes cuando lo acuerde el Pleno.

35. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale cuál de los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados no están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

- A) Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
- B) Los bienes patrimoniales cuando estén cedidos a terceros mediante contraprestación.
- C) Los de dominio público afectos a uso público cuando estén cedidos a terceros mediante contraprestación.

36. Conforme a lo dispuesto en el artículo 171.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (señale la respuesta correcta):

- A) El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación se refiera a la omisión del crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
- B) El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.
- C) El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación se refiera al incumplimiento de las trámites sobre elaboración y aprobación del presupuesto.

37. Según dispone el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, queda excluida de la obligatoriedad de la negociación la materia siguiente:

- A) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
- B) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
- C) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

38. Señala la respuesta correcta conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- A) En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho.
- B) En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo, siendo de aplicación a este personal las previsiones del presente Estatuto con carácter supletorio.
- C) En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto

39. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece en el artículo 404 que:

- A) El funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a diez años.
- B) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
- C) A la autoridad o funcionario público que dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de diez a quince años.

40. Conforme dispone el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las obligaciones de pago exigibles de la hacienda local cuando resulten de la ejecución de sentencia judicial firme (señale la respuesta correcta):

- A) La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.
- B) La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Pleno uno u otro dentro de los seis meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial.
- C) La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuere necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, podrá autorizarse uno u otro dentro del mes siguiente al día de notificación de la resolución judicial.

41. Señala la respuesta correcta:

- A) En los municipios con población igual o superior a cinco mil habitantes existirá un cuerpo de la Policía Local, que como mínimo será de cinco personas funcionarias.
- B) En los municipios con población igual o superior a cinco mil habitantes podrá crearse un cuerpo de la Policía Local, que como mínimo será de cinco personas funcionarias.
- C) En los municipios con población inferior o igual a tres mil habitantes existirá un cuerpo de la Policía Local, que como mínimo será de tres personas funcionarias.

42. Señala cual de las siguientes competencias en materia de tráfico corresponde a los municipios:

- A) El cierre de vías interurbanas cuando sea necesario.
- B) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano y las travesías.
- C) La restricción de la circulación a determinados vehículos en todo el término municipal.

43. Corresponde a las Entidades Locales las siguientes competencias en materia de residuos:

- A) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población de derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos
- B) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población de derecho superior a 2.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos
- C) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales cualquiera que sea su población de derecho, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos.

44. Se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud:

- A) Las modificaciones sustanciales de las instalaciones que deban someterse a Autorización Ambiental Unificada.
- B) Aquellas actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos que se localicen, con carácter general, a una distancia superior a 1.000 metros de una zona residencial.
- C) Los Estudios de Detalle.

45. Según la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, la utilización de las condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las disposiciones que lo regulan, por parte de los titulares o empleados de los establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas, constituye infracción calificada como:

- A) Muy grave.
- B) Grave.
- C) Leve.

46. El servicio de ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, es una prestación del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía:

- A) Condicionada.
- B) No garantizada.
- C) Garantizada

47. Son municipios turísticos de forma automática, por tener el requisito de población turística asistida:

- A) Aquellos municipios cuyos cascos históricos o conjuntos histórico-artísticos o monumentales urbanos hayan sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
- B) Aquellos municipios cuyos cascos urbanos hayan obtenido la declaración de conjuntos histórico-artísticos o monumentales.
- C) Aquellos que están en zonas costeras con afluencia turística.

48. Señala la respuesta correcta:

- A) Los Ayuntamientos podrán otorgar autorizaciones para realizar transporte discrecional en autobús de carácter exclusivamente urbano.
- B) Los Ayuntamientos precisarán autorización de la Comunidad Autónoma para otorgar transporte discrecional en autobús de carácter exclusivamente urbano.
- C) El Ayuntamiento no es competente para otorgar autorizaciones para realizar transporte discrecional en autobús de carácter exclusivamente urbano.

49. Señala la respuesta correcta:

- A) Pueden realizarse obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente en materia de edificación en los Conjuntos históricos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Monumentos previa comunicación a la Junta de Andalucía.
- B) Se prohíbe toda construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de Interés Cultural o perturbe su contemplación, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse reglamentariamente
- C) Será necesario obtener la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación general, con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia.

50. Los horarios de terrazas y veladores para exclusivo consumo de comidas y bebidas instalados en la vía pública y otras zonas de dominio público, anexos o accesorios a establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento, así como en las superficies privadas abiertas o al aire libre o descubiertas que formen parte de los establecimientos de hostelería y de ocio y esparcimiento tiene el siguiente límite:

- A) En ningún caso el límite horario para la expedición de bebidas y comidas en dichos espacios podrá exceder de las 24:00 horas, debiendo quedar totalmente desalojados y recogidos, como máximo, en el plazo de media hora a partir de ese horario límite.
- B) En ningún caso el límite horario para la expedición de bebidas y comidas en dichos espacios podrá exceder de las 1:00 horas, debiendo quedar totalmente desalojados y recogidos, como máximo, en el plazo de media hora a partir de ese horario límite.
- C) En ningún caso el límite horario para la expedición de bebidas y comidas en dichos espacios podrá exceder de las 2:00 horas, debiendo quedar totalmente desalojados y recogidos, como máximo, en el plazo de media hora a partir de ese horario límite.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Según lo previsto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento de carácter sancionador, con archivo de las actuaciones, sin necesidad de formular propuesta de resolución, cuando en la instrucción se ponga de manifiesto que concurre alguna de las circunstancias siguientes:

- A) La existencia de los hechos que pudieran constituir una infracción de carácter leve.
- B) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo presunto, infracción contencioso-administrativa.
- C) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.

2. Los precios de los contratos del sector público, según se recoge el artículo 103.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- A) Solo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.
- B) No podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada, en los términos establecidos en este Capítulo.
- C) Solo podrán ser objeto de revisión si se recoge en el anuncio de licitación.

3. Indica cuál de los siguientes principios no debe informar la prestación de los servicios públicos locales:

- A) Universalidad.
- B) Igualdad y no discriminación.
- C) Arraigo territorial.

4. Señala la respuesta correcta:

- A) Las agencias administrativas locales son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se atribuye la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas de competencia de las entidades locales, salvo las potestades expropiatorias.
- B) Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas y se rigen por el Derecho Público, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus estatutos y demás disposiciones de general aplicación.
- C) Las agencias públicas empresariales locales se rigen por el Derecho Privado, incluso las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos.

5. A los efectos del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía, se considera como comercio ambulante:

- A) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos.
- B) El comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre en vías públicas o privadas, sin someterse a los requisitos expresados en el párrafo anterior.
- C) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con el independencia del medio utilizado.